



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA  
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**

---

**AUTO No. 157**

**27 de marzo de 2025**

**POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO EN CONTRA DE  
RAULIS SAMIR RAMIREZ VARGAS EN EL PROCESO NO. 2025-  
121/UAEJPMP DE COBRO COACTIVO**

DENOMINACIÓN DEL ACTO:	MANDAMIENTO DE PAGO
COBRO COACTIVO:	PROCESO No. 2025-121/UAEJPMP
PROCESO PENAL:	No. 543 (159522-I-069 Segunda Instancia)
SENTENCIADO:	<b>RAULIS SAMIR RAMÍREZ VARGAS</b>
CC:	1.123.405.260

El funcionario ejecutor de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, en uso de las facultades legales conferidas por la Constitución, la Ley 1076 de 2006, su Decreto reglamentario 4473 de 2006, las Leyes 1437 de 2011 y Ley 1564 de 2012, los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, la Ley 1765 del 2015, el Decreto 312 del 2021 y demás normas complementarias o concordantes y

**CONSIDERANDO**

Que, el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 dispone la facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas, así:

*Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.(...).*

Que, el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, establece que "las entidades públicas



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

*definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes”.*

Que, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado<sup>1</sup>, ha precisado la normatividad aplicable al respecto:

*La Sala de Consulta y Servicio Civil se ha referido en varias oportunidades al alcance de la Ley 1066 y a la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas<sup>2</sup> y ha señalado que esa ley unificó las formas de cobro coactivo, inclusive para los órganos autónomos y entidades con régimen especial derivado de la Constitución, en orden a garantizar para todas ellas el ejercicio de esa función en forma ágil, eficiente, oportuna y a través de un mismo procedimiento, el Estatuto Tributario, como claramente se desprende de los antecedentes de esa ley.*

*Así las cosas, la Ley 1066 partió de la naturaleza administrativa de la facultad de cobro coactivo de las obligaciones a favor del Estado, potestad que surge por mandato directo de esa ley, solo si la obligación es «exigible».*

*Observa la Sala que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) complementa y refuerza la Ley 1066 de 2006 al disponer en el artículo 98 lo siguiente: Artículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo (...).*

*En efecto, el CPACA ratifica la potestad de que goza la Administración para efectuar directamente el cobro coactivo de las obligaciones a su favor, aunque deja abierta la opción de acudir a los jueces competentes mediante la vía del proceso ejecutivo. (...)*

Que, la misma Sala de Consulta, ha referido la finalidad de potestad coactiva, consistente en "obtener el pago de obligaciones insolutas a favor de las entidades públicas que consten en documentos que presten mérito ejecutivo"; por lo tanto, el ejercicio de dicha potestad presupone "no solo la existencia de un título ejecutivo previo que contenga la obligación, sino también que, cuando ese título está representado en un acto administrativo, la entidad que lo expide tiene competencia suficiente para declarar (imponer) unilateralmente la obligación. Ha dicho esta Sala que a los procedimientos coactivos les son aplicables los principios de las actuaciones administrativas previstos en el artículo 209 de la Constitución y los del artículo 3 del

<sup>1</sup> Concepto 2459 del 6 de abril de 2021. Link de consulta <https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/244/11001-03-06-000-2021-00011-00.pdf>

<sup>2</sup> Conceptos 1835 del 9 de agosto de 2007, 1882 del 5 de marzo de 2008 y 1882 ampliación del 15 de diciembre de 2009, 1904 de 2008, y más recientemente en el 2126 de 2013.



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

---

ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: "(...) 2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero (...)".

Que, el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional, profirió sentencia el 04 de junio de 2021, dentro de la Causa Penal No. 543, en la cual condenó al señor **PT (R) RAMIREZ VARGAS RAULIS SAMIR**, identificado con cédula de ciudadanía 1.123.405.260 expedida en Dibulla (Guajira), a la pena principal de multa fijada en la suma de **CIEN MIL PESOS M/CTE (\$100.000.00)**, por el delito de favorecimiento de la fuga en la modalidad culposa.

Que el Tribunal Superior Militar y Policial con radicación No. 159522-I-069 profirió sentencia del 6 de diciembre de 2021 en segunda instancia, que confirmó la sentencia del 04 de junio de 2021 y por ende la multa impartida en contra del acusado.

Con ejecutoria de fecha 25 de febrero de 2022, según proveído de fecha 24 de febrero de 2025, oficio No. 11-DERIS JIRIS el Juzgado de Primera Instancia Departamento de Policía Risaralda con función de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento informa la fecha de ejecutoria, con la siguiente anotación:

"Pese a que el secretario judicial del T.S.M.P en su momento, no plasmó físicamente la constancia de ejecutoria, la misma procede en los términos y por el ministerio de la ley 522 de 1999, y no por la simple constancia de ejecutoria del secretario, la sentencia de pleno derecho, queda ejecutoriada una vez se cumplan los términos legales para interponer los recursos ordinarios sin que estos hubiesen sido presentados, o cuando se hayan resuelto todos los recurso interpuestos, por lo tanto, la ausencia de constancia secretarial no afecta la ejecutoria de la sentencia. Tal y como lo manifiesta la jurisprudencia, en este caso la Corte Suprema de Justicia sala de casación penal estableció que: "las constancias de los servidores judiciales dejadas en el desarrollo de sus labores no revisten la entidad de alterar los términos legales, particularmente porque son meramente informativas ". SP.16480-2024/Radicación No. 43186".

Así las cosas, contabilizados los términos de ley la providencia quedó debidamente ejecutoriada el día 25-02-2022.

Que dentro del sumario No. 282 del Juzgado de Primera Instancia Departamento



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

CPACA<sup>3</sup>.

Que, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial es una entidad con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, la cual tiene por objeto principal la organización, dirección, administración y funcionamiento de la Jurisdicción Especializada, creada mediante el artículo 44 y siguientes de la Ley 1765 de 2015; *"Por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño en sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se dictan otras disposiciones"*.

Que, posteriormente fue expedido el Decreto 312 de 2021; *"Por el cual se fija la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial"*, en cuyo artículo 35 se determinó suprimir la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar una vez fuese nombrado el director de la nueva Unidad<sup>4</sup>, lo cual se surtió mediante el Decreto No.401 del 14 de abril de 2021, por el que se efectuó esa designación.

Que, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial asumió la atención de los procesos judiciales, de cobro coactivo y disciplinarios, a partir del 26 de septiembre de 2021, transcurridos seis (6) meses de la organización de su estructura y aprobación de su planta de personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley 1765 de 2015.

Que, el artículo 9º del Decreto 312 de 2021, otorga a la Oficina Asesora Jurídica de esta entidad la facultad de llevar a cabo el proceso de cobro coactivo conforme a la Ley 1076 de 2006, el Decreto reglamentario 4473 de 2006 y demás normas que lo modifiquen o complementen.

Que, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial es competente para conocer del proceso de la jurisdicción coactiva.

Que, el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 establece que "Prestarán mérito

<sup>3</sup> *Ibíd.*

<sup>4</sup> "Artículo 35. Supresión de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Una vez nombrado el Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, se suprime la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa Nacional, de que trata el artículo 26 del Decreto 1512 de 2000".



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

---

de Policía Risaralda con función de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento, fue agotada la etapa de cobro persuasivo sin que el señor **PT (R) RAMIREZ VARGAS RAULIS SAMIR**, identificado con cédula de ciudadanía 1.123.405.260 expedida en Dibulla (Guajira), pague o amortizara la multa impuesta por el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional de Bogotá, conforme fue informado por ese despacho mediante oficio 11-DERIS JIRIS del 24 de febrero de 2025.

Que con fundamento en lo previsto por los artículos 98 y 99 de la Ley 1437 de 2011, 826 y siguientes del Estatuto Tributario, el título ejecutivo anteriormente enunciado contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible y cumple con los requisitos exigidos para el inicio, trámite y terminación del proceso de cobro coactivo.

Que, por lo anteriormente expuesto, la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Librar mandamiento de pago a favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial a cargo del señor **PT (R) RAULIS SAMIR RAMIREZ VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.123.405.260 expedida en Dibulla (Guajira), por la multa impuesta en la sentencia el 04 de junio de 2021, dentro de la Causa Penal No. 543, proferida por el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional, por valor de **CIEN MIL PESOS M/CTE (\$100.000.00)**, por concepto de capital, más los intereses que se causen, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, desde la ejecutoria del título hasta que se realice el pago total de la obligación.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Advertir al deudor que, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, cuenta con quince (15) días, contados a partir de la notificación de este acto, para cancelar el monto referido o proponer mediante escrito las excepciones del artículo 831 ibidem.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar este mandamiento de pago personalmente al señor **PT (R) RAULIS SAMIR RAMIREZ VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.123.405.260 expedida en Dibulla (Guajira), mediante los medios electrónicos establecidos por la Ley 2213 de 2022<sup>5</sup> o previa citación para

---

<sup>5</sup> Ley 2213 de 2022 "Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. En caso de no surtirse la notificación personal, por cualquier causa, se procederá de conformidad con lo establecido en los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes.

**ARTÍCULO CUARTO:** Ordenar la investigación de las cuentas de ahorros y corrientes de las diferentes entidades financieras y/o de las billeteras digitales a nombre del señor **PT (R) RAULIS SAMIR RAMIREZ VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.123.405.260 expedida en Dibulla (Guajira), en cualquiera de las sucursales del país.


**ARTÍCULO QUINTO:** Ordenar la investigación de bienes muebles e inmuebles que se encuentren inscritos a nombre del señor **PT (R) RAULIS SAMIR RAMIREZ VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.123.405.260 expedida en Dibulla (Guajira), en las entidades oficiales y/o privadas que tengan a su cargo la custodia de registros públicos, tales como las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notariado (VUR) y el Registro Único Nacional de Transito - RUNT.

**ARTICULO SEXTO:** Líbrense los oficios respectivos.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Informar al deudor que contra el presente acto no procede ningún recurso, tal y como lo dispone en el Art. 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.

### NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

  
**ALEJANDRO BELTRAN MARTINEZ**  
**JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA**

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Claudia Rincón		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.			